

EL DERECHO A DROGARSE (*)

En un artículo publicado en septiembre de 2006 en *El Espectador*, bajo el título del "derecho a drogarse", Salomón Kalmanovitz defendió el sustento de la sentencia 221-94 de la Corte Constitucional, que confirmó en Colombia el derecho de sus ciudadanos a consumir drogas de uso ilícito en ejercicio pleno de la autonomía de su voluntad. Por coincidencia, en este mismo país la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público en mayo de 2013 el informe denominado como "El problema de las drogas en las Américas", un documento que en sus más de cien páginas considera al usuario como víctima o adicto crónico y que, por lo tanto, sugiere a nuestros estados el cambio del enfoque penal hacia un abordaje desde la salud pública.

Es cada vez mayor el consenso universal para suprimir del sistema penal las detenciones o arrestos a consumidores de drogas de uso ilícito. El problema ahora pertenece a la esfera sanitaria como respuesta a la sobrediagnosticada criminalización de sus usuarios, lo que en Argentina podría intuirse del componente total de delitos de drogas que, según la Procuraduría de Narcocriminalidad, ha llevado a la tenencia para consumo personal a configurar el 38 por ciento de los casos informados a 2012, es decir el más alto seguido de los reportes por comercio y almacenamiento.

A simple vista, parecería que es más efectiva la reducción de daños cuando cambiamos la matriz de los denominados "usos indebidos" de la política criminal hacia la política de salud, lugar desde donde ahora comienza a concentrarse el debate. Mientras se presenta este nuevo escenario, no hemos agotado todavía la discusión sobre el tratamiento para las dependencias ni eliminado de la justicia la posibilidad de invadir la vida y la libertad de los consumidores. La oferta pública de la salud para el tratamiento de las dependencias por consumo ilícito de drogas aún es insuficiente, y en muchos casos hasta precaria.

Cabe resaltar que Argentina ha dado un paso importante con la publicación en 2010 de la Ley 26.657 sobre salud mental. Sus artículos 20 y 21 admiten la interna-

ción involuntaria a la red de hospitales públicos cuando los tratamientos ambulatorios no sean posibles; se presente un dictamen profesional que determine además la existencia de un riesgo para sí o terceros; y, sobre todo, que proceda una autorización judicial sujeta a contradicción. Sin duda, se trata del empleo previo del debido proceso para habilitar procedimientos de salud mental, bajo una clara dirección que va desde la información sanitaria a la decisión judicial.

Ante la evidente progresión derechos a partir de leyes como la de salud mental, comienzan también a despertarse viejas experiencias de transición internacional entre la justicia penal y la salud pública, las cuales no necesariamente van en la dirección salud-justicia sino justicia-salud. La más afamada es la sugerencia a ultranza de la OEA sobre nuestros estados para la implementación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) o cortes de drogas, inaugurándose así por primera vez esta "iniciativa" en octubre de 2013 en la provincia de Salta. La modalidad en que operan los TTD no es más ni menos que la manifiesta voluntad de someterse a un tratamiento involuntario. Dicho en términos procesales, la suspensión del juicio a prueba mediante la participación voluntaria de la persona imputada de cometer delitos menores a tratamiento terapéutico por el tiempo que dure la suspensión, luego de lo cual y a satisfacción del juez podrá declararse extinguida la acción. Una ganga si de evitar la prisión preventiva y una eventual condena se trata.

Los TTD no solo que vulneran el estatus de inocencia de los procesados, sino que además estimulan a la autoincriminación por uso ilícito de drogas. Nada más contradictorio si decimos que desde la OEA el consumo debe ser descriminalizado. No obstante, se reafirma el reproche penal al consumo ilícito, utilizando como alternativa del proceso judicial al proceso terapéutico de salud mental. Por ende, no se trata de ninguna ganga sino del maniqueo recurso del discurso sanitario para la exoneración de cargos criminales, el mismo que recibe al procesado en calidad de enfermo-dependiente.

No queda claro si los TTD esperan que la persona procesada sea diagnosticada con problemas de dependencia. Tampoco si ésta es "beneficiaria" de una suspensión aunque no sea dependiente. La forma en cómo se han desarrollado las cortes de drogas en Estados Unidos, México, Chile o Costa Rica harían presumir que la información sanitaria previa es irrelevante. Lo más importante es la voluntad y participación del procesado a los programas de rehabilitación para la dependencia de drogas, servicio que en su mayoría sigue estando en manos de corporaciones privadas y religiosas, es decir en una dimensión aún desconocida por la justicia.

Las cortes de drogas no juzgan el uso ilícito de drogas como agravante en la comisión de delitos menores, sino que emplean la declaración voluntaria de su consumo para sugerir un tratamiento terapéutico nada despreciable. Por lo tanto, si bien no es una instancia de juicio como tal, sí lo es en lo que tiene que ver al consumo donde, contradictoriamente, es clara la emisión de un juicio moral. Nos queda la duda de si la recurrida invocación del artículo 19 de la Constitución Argentina sea una realidad, pues aunque las drogas no sean inocuas su consumo no ofende el orden ni la moral pública, salvo su interpretación más regresiva.

Una persona que consume drogas de uso ilícito no se encuentra necesariamente en grados de dependencia. Puede estar en grados o frecuencias de abuso o uso habitual, de uso ocasional e incluso de uso experimental. En cualquiera de ellos debe admitirse que el uso de drogas aunque ilícito deviene del ejercicio mismo de la autonomía de la voluntad o libre desarrollo de la personalidad, cuestión que ha sido invisibilizada en los debates de implementación de experimentos y políticas sobre la transición del enfoque penal al sanitario. Es posible entonces que la Ley de Salud Mental se encuentra más a la altura de la justicia, aunque a ella le cueste aún reconocer de una vez por todas y en todo el país que drogarse también es un derecho. ■



(*)Por Jorge Vicente Paladines